

Patrimonio regional, patrimonio nacional

No puede plantearse la cuestión del patrimonio regional y el patrimonio nacional, lógicamente, sin entrar a fondo en la resbaladiza dicotomía región-nación. Pero tampoco es oportuno convertir un discurso sobre patrimonio cultural en una disquisición sobre los límites del nacionalismo. Por ello trataré de que en esta exposición de hoy el marco no se me coma al cuadro, pero que tampoco, por otra parte, éste pueda quedar desprovisto de las imprescindibles referencias geográficas que delimitan el enunciado de la ponencia.

Podría enfrascarme hoy aquí en un análisis de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 25 de Junio de 1985, o remontarme a la Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, de 1933, o incluso detenerme en el Decreto-Ley de Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística, de 1926. Pero no voy a hacer nada de esto, ya que lo que quiero ahora no és estudiar aspectos de la legislación sobre Patrimonio, sino reflexionar y hacer una serie de consideraciones esenciales que definen el mismísimo contexto en el que se mueve la noción de Patrimonio.

Antes que nada hay que establecer que la diferencia entre lo nacional y lo regional es en gran parte subjetiva. Más exactamente es de una subjetividad colectiva, o sea definida por la percepción no de un solo sujeto individual sino de toda una comunidad, bien sea la misma comunidad adjetivada de una u otra manera, bien sea otra comunidad directamente afectada por la cuestión. En general todas las palabras que designan realidades complejas tienen un margen más o

menos amplio de imprecisión. Son nombres que tendrían que servir para entenderse pero que a veces no consiguen su objetivo, ya que quien los pronuncia no siempre los carga con el mismo significado que se desvelará en la mente del que los escucha.

Región puede significar, por ejemplo, una parte relativamente pequeña de un país sin demasiadas características radicalmente propias, como por ejemplo La Rioja. La palabra región también se ha utilizado para significar una parte substancial de un estado soberano con rasgos nacionales bien diferenciados, como por ejemplo Euskadi. Y a la vez la misma palabra región puede utilizarse para designar una zona notablemente amplia de todo un continente, zona que puede extenderse a través de varios países, e incluso de varios estados soberanos, como por ejemplo el llamado Oriente Medio. Todo esto en el habla común -e incluso en el habla más o menos académica- son regiones, evidentemente de características muy distintas entre sí, pero todas ellas etiquetadas por una misma denominación convencional. Por otra parte, para complicar más las cosas, la palabra región tendrá un contenido distinto si la empleamos en un contexto geográfico, en un contexto político o en un contexto económico, y no digamos cuando la utilizamos para hablar de realidades tan apartadas de todas éstas como pueden ser las regiones atmosféricas o la mismísima anatomía (así también decimos, por ejemplo, la región lumbar).

Como vemos, pues, “región” no es un concepto demasiado concreto, y por ello la imprecisión de la palabra puede inducir a confusiones de contenido. Además las palabras se cargan y descargan de significados con el paso del tiempo, a tenor de la evolución impuesta por el devenir de las circunstancias.

Sea como sea, el uso ha provocado que “región” como sinónimo de zona

geográfica con personalidad histórica no sea palabra de alto voltaje. Hay que verla como una adaptación interesada de un término latino, a fin de disponer de un vocablo para designar comunidades de bajo nivel político, y para distinguirlas de las que tienen un nivel político superior, a las que modernamente suele llamarse “naciones”. Sucede, sin embargo, que algunas de las realidades histórico-geográficas llamadas por muchos regiones pueden tener un alto nivel histórico-cultural, y que su bajo perfil político no sea consecuencia de deficiencias esenciales suyas sino de avatares históricos.

Es evidente que la conciencia nacional de los nativos, que es la que en definitiva, como es obvio, delimita el carácter de una nación, muchas veces no aflora sólo en aquellas comunidades que disfrutaban de independencia política, sino también en aquellas otras que tienen un alto grado de personalidad histórica, lingüística y cultural, personalidad que no siempre alcanzó un status de soberanía política, o que si lo alcanzó en un pasado tal vez lo perdiera posteriormente, sin dejar por ello de ser una comunidad con características nacionales.

La palabra “región” se usa pues a menudo para enmascarar naciones sin estado; para evitar que sea llamada nación cualquier comunidad no soberana, y que no se origine así algún equívoco de consecuencias imprevistas. Los catalanistas de principios del siglo XX, que aun no advertían connotaciones indeseadas en el vocablo región, no tenían inconveniente en definirse a sí mismos como “regionalistas”, un calificativo bien poco grato, en cambio, a los ojos de la mayoría de catalanistas de épocas posteriores. Ello es así porque en un principio no se cuestionaba la designación de “región” aplicada a una parte de un estado soberano, aunque se tratara de una parte reivindicadora de una personalidad

distinta a la del resto. De la misma forma que este estado soberano era convencionalmente llamado “nación” sin que esta denominación despertara suspicacias entre aquellos mismos que, sin dejar de calificarse de “regionalistas”, teorizaban sobre *La nacionalitat catalana*, título, como es sabido, del libro insignia del carismático líder catalanista Enric Prat de la Riba, de 1906.

Si la palabra región, pese a su vaguedad se mantiene, sin duda es porque sirve para nivelar por abajo a todas las comunidades no estatales y diluir así el relieve de las de mayor personalidad, al emplear para designarlas la misma palabra usada para designar a las menos densas de contenido. En la consolidación de la España de las Autonomías, por ejemplo, antiguas comunidades nacionales con hechos diferenciales indiscutibles ocupan prácticamente el mismo lugar jerárquico que pequeñas unidades desgajadas más o menos circunstancialmente de grandes regiones históricas.

Aunque poco a poco se han ido depurando los significados, a la vez se ha tendido, de manera inexacta y abusiva, a consolidar la identificación de nación con estado soberano; y ésta es una simplificación que actúa vivamente todavía entre una buena parte de la población media, especialmente porque en la definición de los conceptos nacionales de las personas intervienen decisivamente casi siempre factores externos, sobre todo de naturaleza educativa, orientados normalmente por el poder político. Por esto, hoy ante entidades tan artificiales como Checoslovaquia -difíciles incluso de unir en sus nombres-, que se han desmoronado incruentamente en los últimos años, el ciudadano medio desconoce la naturaleza de lo que queda en su lugar, ya que si fué informado suficientemente, ya en la escuela, de la existencia del periclitado engendro, nunca lo fué de las naciones reales que lo

integraban. En la escuela todos los niños del mundo oían reiteradamente la palabra Checoslovaquia -como seguramente tiempo atrás habían oído también por todas partes hablar del Imperio Austro-Húngaro-, pero nunca o casi nunca se les informaba, por ejemplo, de que allí mismo existía algo mucho más sólido que se llamaba Bohemia.

Conceptos geográfico-políticos como Checoslovaquia arraigaron tanto en la mentalidad colectiva que alguien tan fino como el escritor Eduardo Mendoza, en un pasaje de su novela *La ciudad de los prodigios*, se refiere a unas pistolas fabricadas en Checoslovaquia, en un contexto de 1898, es decir cuando Checoslovaquia todavía no tenía ningún tipo de existencia jurídica. Esto es sólo un ejemplo de hasta que punto la enseñanza secundaria -y si me apuran también la universitaria- establece, al referirse a Europa, unos esquemas, una falsilla, basada en la geografía política del momento, e induce a creer al alumno que los estados de hoy son poco menos que realidades permanentes y uniformes. De esta manera la verdadera constitución de Europa, la Europa de los pueblos, pasa a ser algo sólo conocido por un escaso número de especialistas.

El problema es muy complejo, y al definir el carácter nacional de una comunidad hay que tener en cuenta otros factores muy importantes que acaban de complicar aun más la cosa, como algo que para muchos es desconcertante y para otros es simplemente desconocido, y que lo suelen olvidar tanto los imperialistas -por llamarlos de alguna manera- como los separatistas: y és que la nación no es un concepto ligado fundamentalmente a una base geográfica sino, antes que nada, a una comunidad humana que se asienta o no en un territorio fijo. Cuando en una película del Oeste clásica alguien se refiere a la nación apache está

hablando más de personas que de tierras. Pero no es necesario hacer ninguna excursión al cine de Hollywood para constatar ésto. En una fuente española tan venerable como el Diccionario de Autoridades, publicado en 1732, nación no es definida todavía como territorio sino como “el acto de nacer” o “la colección de los habitantes en alguna Provincia, País o Reino”. Por ésto en la traducción al castellano de los poemas de Ausias March de 1539, el autor aparece caracterizado como “caballero valenciano de nación catalán”, expresión que si no tenemos en cuenta la evolución de los significados a través de los años y los siglos puede parecer hoy contradictoria.

El pueblo judío mantuvo su personalidad nacional durante siglos estando disperso por todo el mundo y habiendo perdido su patria física, y muchos judíos tuvieron que aceptar oficialmente la nacionalidad de la tierra donde residían, cuando en realidad se sentían partícipes sólo de la comunidad humana del pueblo de Israel. De ahí sus grandes dificultades de adaptación, durante siglos, a su medio geográfico.

En un mismo territorio, pues, pueden convivir -o a veces desgraciadamente malvivir- dos o más comunidades nacionales naturales de la zona, o lo que es lo mismo con hondas raíces en ella, que frecuentemente se disputan su exclusividad. Y estas comunidades nacionales que coexisten, con hostilidad mútua o sin ella, reconocen como propio el mismo territorio, cuyos límites, para acabar de confundirse, a veces ni tan siquiera son coincidentes. Así, por ejemplo, un “nacionalista español” radicado en Barcelona se sentirá extranjero en Perpinyà, porque considerará que aquello es Francia, mientras que un nacionalista catalán de la misma residencia se sentirá allí obviamente tan en casa como en Figueres, y si

me apuran más en casa aún que en Cuenca. Son cosas de los sentimientos, que no son caprichosos sino que se basan en realidades que tienen muy hondas raíces históricas, y reprimirlas, como se hizo en España durante siglos, es un muy mal camino, no sólo por la injusticia que representa, sino porque a la larga un sentimiento nacional ahogado puede acabar aflorando de nuevo mucho más envenenado que si no hubiera sido nunca combatido. Todo es pues muy relativo y cualquier posición tajante en este terreno es consubstancialmente falsificadora del panorama real de las cosas.

La realidad es siempre plural, compleja, y por esto los esfuerzos que se han hecho en muchos países para esquematizar y simplificar las características de su imagen “nacional”, a parte de falsear la verdadera naturaleza de las cosas, suelen esconder maniobras de imposición, de hegemonía, de las mayorías por encima de las minorías.

Por todo esto, que un monumento sea considerado de valor nacional o bien del valor inferior que se ha dado en llamar “regional”, dependerá en gran parte de que sea valorado como patrimonio espiritual propio no sólo por los miembros de la comunidad nacional en la que se halle la joya, sino también por aquellos otros que siendo ciudadanos del mismo estado pertenezcan sin embargo a una comunidad nacional distinta.

Que un patrimonio cultural sea nacional o “regional”, pues, en realidad interesa poco, ya que la etiqueta depende exclusivamente de la óptica del observador. Monumentos insignes pueden ser vistos con indiferencia por comunidades enteras que no se identifican con su identidad cultural, o en el peor de los casos pueden generar incluso aversión por representar una parte indeseada de

la realidad viva del propio país en el que se encuentran. Más de un criollo americano, por ejemplo, en su afán de participar del presunto prestigio superior de la cultura europea, verá con desdén los grandes ejemplos de las culturas precolombinas, y a la vez, paradójicamente, se sentirá arraigado a aquella misma tierra que generó los monumentos por él menospreciados.

Más pues que un debate inútil entre patrimonio nacional y patrimonio “regional” lo que importa es meditar sobre la distribución del patrimonio cultural mueble a lo largo y a lo ancho de la comunidad política de carácter estatal. No hay que olvidar que el estado, más que una comunidad natural, muy a menudo no es más que la consolidación última de una serie de lejanas anexiones territoriales de origen dinástico o bélico. A menudo el mismo estado que se dotaba de una unidad política fuerte, en detrimento de otras realidades más frágiles existentes en su seno, ha tendido a concentrar físicamente sus principales bienes culturales muy cerca de sus grandes focos de decisión y de poder. Es como si los rectores del estado quisieran tener siempre sus tesoros a mano, y desconfiaran de depositarlos en zonas lejanas.

La España democrática de hoy ha dado grandes pasos hacia una concepción más verdadera de sus contenidos nacionales, pero todavía tiene una importantísima asignatura pendiente: la de la descentralización de los bienes culturales, un problema de solución hoy más difícil todavía que hace medio siglo. Pues aún hoy, cuando el Estado adquiere patrimonio cultural, sea por compra, por vía tributaria o por cualquier otro conducto, únicamente contempla un destino físico de estos bienes: las grandes infraestructuras culturales del propio estado; sin acordarse de que en la España autonómica de hoy, culturalmente hablando, el

estado tiene, teóricamente por lo menos, un papel mucho menos fuerte que en la España de ayer, pues las comunidades autónomas suelen tener competencias culturales exclusivas, con la salvedad de aquellas materias reservadas al estado, como lo concerniente a exportación o a expolio.

Con todo, el propietario de los bienes adquiridos es el estado, y hay que concretar, claro está, la ubicación física de estos bienes que pasan a engrosar el patrimonio público. Hasta aquí, si se quiere, nada que objetar. Lo que sucede es que la mayor parte de estas infraestructuras estatales a donde se destinan las mejores pinturas, esculturas u objetos artísticos, están en la capital del reino, con lo que unos bienes que pertenecen a todo el estado, al que sobre el papel han de enriquecer, en la práctica benefician preponderantemente a sólo una parte de éste, creando un inmenso desequilibrio de riqueza cultural de titularidad estatal entre las distintas partes integrantes de España.

Esto es así por inercia histórica, pero también es así por falta de interés en corregirla. Es absolutamente lógico, por razones históricas innegables, que el destinatario natural de cualquier gran pintura europea de la edad moderna adquirida por el estado español sea una institución de tan indiscutible naturaleza como el Museo del Prado, de Madrid. Un estado que tenga una antigua colección real convertida en museo público de la categoría del Prado no sólo ha de cuidarla sino que ha de convertirla en el gran receptor oficial de piezas del mismo tipo de las que integran desde siempre el fondo principal del gran museo. Ésto es así y es lógico que así sea. Pero ya no es tan lógico, por ejemplo, que al crear de nueva planta, en fechas relativamente recientes, un museo nacional dedicado al arte contemporáneo -el que sería llamado Centro de Arte Reina Sofía-, hubiera de ser éste ubicado

también en Madrid. Se podía haber pensado en diez otras soluciones mejores, y en cambio se optó por más de lo mismo: lo de tener los tesoros a mano que antes decíamos. Ahí se perdió la oportunidad de reequilibrar un poco lo que la historia había desequilibrado un mucho, o lo que es lo mismo, se perdió la oportunidad de hacer una buena política cultural.

Y es que los bienes en cuestión, aunque pertenezcan al estado, que somos todos, echan raíces en el lugar concreto en que se ubican, y aquel patrimonio nacional, a la vez adquiere también dimensión inequívoca de patrimonio regional o local, aunque su contenido a veces no tenga demasiada relación con el lugar en cuestión. El caso reciente de las polémicas suscitadas por la posible reordenación de los fondos del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, sito en Salamanca, es buena prueba de ello: un archivo del Estado, de contenido no específicamente salmantino, al intuirse su posible remodelación parcial, pasa a ser considerado por los habitantes del municipio en el que físicamente se ubica como un bien inapelablemente local; y como tal es defendido por el Ayuntamiento de los posibles traslados hipotéticamente decididos por el depositario legal de su titularidad que no es otro que el estado.

Llevo bastantes años como miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura, por lo que he podido observar todos los aspectos de esta cuestión bastante de cerca, y la verdad es que hay aún una inercia tan grande que vencer que hay que dar todavía mucho tiempo al tiempo para que las cosas se equilibren mínimamente. Pero lo indiscutiblemente cierto es que así como en el camino de las libertades políticas se ha avanzado mucho, en el de la corrección del centralismo cultural no

se ha progresado demasiado. Las comunidades autónomas, claro está, pueden crear museos con sus propios presupuestos, cuando antes tenían que conformarse con el museo “provincial” que el estado tenía a bien concederles; pero siempre seguirá habiendo unos presupuestos muy grandes atribuidos al estado aunque las competencias de cultura hayan sido traspasadas a las comunidades; y estos presupuestos, en lo que a adquisición de patrimonio cultural se refiere, servirán mayoritariamente para enriquecer instituciones teóricamente comunes a todos pero que en la práctica están instaladas en su mejor parte en la capital del Reino.

Ahora hay comunidades autónomas más o menos naturales donde antes había provincias artificiales, es cierto, pero también lo es que las comunidades autónomas no han eclipsado a estas provincias, y lo que es peor tampoco han substituido al estado en lo que a cultura se refiere. No se si es bueno que haya un solo Museo Nacional de pintura, una sola Biblioteca Nacional, un único Teatro Nacional, una única Orquesta Nacional, etc., o si lo mejor hubiera sido la existencia de varias entidades de cada tipo equitativamente repartidas por toda la geografía del estado. Pero si damos validez al modelo de las grandes instituciones únicas ¿no hubiera sido mucho mejor que las sedes de esas entidades culturales del estado se hubieran repartido entre varios núcleos, en lugar de concentrarse casi siempre en uno solo? En Alemania, por ejemplo, grandes infraestructuras culturales, de primer orden, pueden encontrarse en ciudades pequeñas.

En España ha habido la constante voluntad política, a la francesa, de fomentar una unidad complicada, por lo radicalmente variado de sus partes, y se ha buscado en consecuencia a toda costa la cohesión del territorio, aunque a menudo se utilizaran para ello procedimientos que eufemísticamente podríamos calificar de

quirúrgicos. Un estado se cohesionan por la fuerza, desde arriba -y en este caso sus promotores han de estar siempre literalmente al pie del cañón-, o se puede cohesionar también, por abajo, por la corresponsabilidad plena de todas sus partes. Yo estoy convencido de que si cuando esto era aún posible, la Orquesta Nacional de España se hubiera situado en Valencia, el Teatro Nacional en Bilbao, el Museo Arqueológico Nacional en Sevilla, o el Museo Nacional de Arte Contemporáneo en Barcelona, manteniendo en Madrid el Museo del Prado, por poner unos ejemplos al azar, esa entelequia llamada España, que como toda gran extensión de terreno fruto de circunstancias conflictivas tiene una difícil unidad natural, sería por lo menos una realidad algo más sólida de lo que verdaderamente hoy es. Como viejo aficionado a la música yo recuerdo perfectamente que en los años sesenta la Orquesta Nacional de España iba al Palau de la Musica Catalana de Barcelona, de uvas a peras, a tocar a los mismos precios en taquilla que la Filarmónica de Berlín con Karajan al frente, mientras en Madrid tocaba semanalmente a precios populares. Evidentemente el melómano catalán terminaba por considerar tan extranjera a una como a otra, pese a que la española salía en parte de sus impuestos, y en todo caso decantaba sus preferencias por la alemana por obvias razones de calidad.

Se diría que históricamente los más preocupados por la identidad de España han sido precisamente los que menos han hecho para que el protagonismo se repartiera a lo largo y a lo ancho de la península y de sus islas.

Cuando se piensa en patrimonio cultural muy a menudo viene a la cabeza la idea del patrimonio arquitectónico o del histórico-artístico. Pero hay otras partes del patrimonio que son igualmente importantes; por ejemplo la toponimia, que marca

indeleblemente el territorio con nombres, expresión genuina de una personalidad. La toponimia va íntimamente ligada a otro de los grandes patrimonios culturales, el lingüístico, del que pende todo el rico patrimonio literario. Y es aquí donde han sonado más frecuentemente las sirenas de alarma de la españolidad. Un español medio normalmente valora por un igual monumentos tan distantes entre sí como la catedral de Santiago de Compostela, la Alhambra de Granada, la catedral de León o los edificios de Gaudí en Barcelona; pero si pensamos en los otros grandes patrimonios culturales, igualmente fundamentales, nos podríamos preguntar, por ejemplo, si ha preocupado alguna vez a los españoles en general la salud de los idiomas que no son el castellano, que teóricamente constituyen un patrimonio cultural “español” de la mayor importancia. Y la triste respuesta es que en general, con honrosas excepciones, si les ha preocupado ha sido en negativo: pues lo que de verdad ha inquietado muy a menudo a muchos españoles militantes es que estas lenguas, nunca aprendidas, nunca conocidas y nunca amadas por ellos, pudieran hacer sombra al único idioma que los españoles “centrales” han sentido como propio: el castellano.

Las aberraciones cometidas en la toponimia periférica desde los años cuarenta hasta los setenta, ante la indiferencia generalizada de los no afectados, son el testimonio más visible de lo que estoy diciendo. A los “otros” idiomas no los han sentido nunca como algo suyo, e incluso han asistido indiferentes a reiterados intentos de eliminación o, todavía hoy, de fragmentación. Una de dos, si el catalán, el gallego o el vasco son lenguas españolas, en consecuencia habría que cuidarlas entre algodones, velar por ellas y difundirlas, y no sólo desde las comunidades autónomas en las que son propias sino desde el mismo aparato del estado central,

entre otras razones porque habitualmente estas lenguas son naturales -igual que el castellano- de más de una comunidad autónoma; y si en cambio esos idiomas no son patrimonio español habría que dejar de hablar de nacionalidad española, ya que ésta consiste precisamente en la suma de las distintas culturas y lenguas que integran el estado español, y no en la hegemonía de la numericamente mayor sobre las otras. Una nacionalidad española que sólo reivindique el idioma de Cervantes, como se está haciendo desde siempre, es en realidad una nacionalidad “castellana”; la categoría de “española” se la daría precisamente la incorporación plena y entusiasta de todo aquel patrimonio cultural que muchos ignoran o marginan, para desear conservar sólo el territorio físico en el que se formó.

Y hay que asumir de una vez, sin reticencias ni claudicaciones interesadas, que de la misma forma que el castellano Cervantes y el andaluz Lorca se expresan con variantes, pero en el mismo idioma, el catalán Espriu y el valenciano Ausias March, con sus correspondientes variantes también usan el mismo instrumento lingüístico.

Lo que se ha hecho históricamente en España, pues, ha sido ignorar, negar o bien incluso algo tan aberrante como tratar de eliminar los idiomas periféricos, como hizo con gran éxito precisamente el jacobinismo francés, que consiguió reducir, en nombre del progreso!, el occitano, el bretón o el catalán hablados dentro de sus fronteras políticas, a las meras reliquias antropológicas que hoy son, sin darse cuenta de que todo lo que el estado ganaba en uniformidad lo perdía en riqueza cultural, lingüística; y sin darse cuenta tampoco del contrasentido que significaba partirse el pecho por la conservación de un monumento cultural de piedra -como la catedral de Chartres, por poner un ejemplo-, mientras se favorecía

el ninguneo de otro monumento vivo, también patrimonio “francés”, de similar o superior rango, como es -casi tendríamos que decir era- el idioma occitano, la histórica y fecunda lengua de oc.

Volviendo a España, hay que replantearse sin hipocresías la cuestión del patrimonio cultural de los pueblos. No quiero utilizar ni el adjetivo nacional ni el “regional”. Si el estado mantiene atribuciones y recursos para defender y conservar el patrimonio cultural común, ha de hacerlo aparcando definitivamente tics centralistas y asumiendo plenamente toda la riqueza inconmensurable de las distintas culturas e idiomas de España. A veces este argumento ya se ha planteado, y hasta ha llegado a ser un tópico, pero en la práctica no ha pasado jamás de formulación retórica. Éstas no son culturas “regionales”, sino en todo caso parte destacada e imprescindible de la cultura “nacional” española, que es la cultura, si es que existe, de una nación de naciones. Lo que sucede es que muchos tienen de la cultura “nacional” española una imagen falsa, creada secularmente desde el castellanismo excluyente, y hay que empezar a restaurar la verdadera imagen cultural de España, un ente que -no lo olvidemos- existe únicamente si es plural.

FRANCESC FONTBONA